

LA FUERZA ARMADA ANTE LAS ELECCIONES

Susana Jiménez

Postura oficial: seguridad y apoliticidad

La Fuerza Armada ha tratado de presentar una actitud profesional en este proceso electoral cumpliendo así los fines constitucionales. Según el artículo 211 de la actual Constitución la Fuerza Armada debe defender la soberanía del Estado y la integridad de su territorio, mantener la paz, tranquilidad y seguridad públicas y el cumplimiento de la Constitución y demás leyes vigentes. Pero velará especialmente, continúa el artículo, para que se mantenga la forma republicana de gobierno y el régimen democrático representativo, no se viole la norma de la alternativa en la presidencia y se garantice la libertad del sufragio y el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, la política partidista es un asunto exclusivamente de los civiles. La posición oficial de la Fuerza Armada en el proceso electoral ha sido un intento de ser consecuente con este mandato constitucional y de abandonar sus frecuentes y determinantes intervenciones en la vida política del país en el pasado. La Fuerza Armada explícitamente ha querido distanciarse de la pugna electoral y del pasado que la condena.

Sus diversos voceros oficiales han hecho pública esta postura ante el proceso electoral antes de cada una de las votaciones. En sus mensajes han asegurado que garantizarán la seguridad personal y política de los votantes. El 23 de marzo, el ministro de defensa dirigió un mensaje a través de los medios de comunicación informando al pueblo su determinación e invitándolo a emitir su voto confiadamente. El director de la Policía Nacional, coronel López Nuila, también invitó al

pueblo a salir y emitir su voto confiado en que los miembros de ese cuerpo de seguridad y de toda la institución militar le garantizarían su seguridad. El director de la policía deseaba que el pueblo se hiciera presente políticamente en lo que sería una fiesta cívica.

De la misma forma, estos voceros oficiales han repetido antes de cada una de las votaciones que garantizaban también la apoliticidad de la institución armada. El ministro de defensa, en su mensaje del 23 de marzo, dijo que la apoliticidad era absoluta, pues apoyaban a todos los candidatos por igual y velarían para que las elecciones fueran completamente limpias, honestas y libres. El director de la Policía de Hacienda, coronel Nicolás Carranza, confirmó las palabras del ministro y dijo que la apoliticidad de ese cuerpo de seguridad era total; también prometió una esmerada vigilancia en las mesas de votación. Al Consejo Central de Elecciones, el ministro le reiteró su plena confianza y su compromiso de garantizar el resultado cualquiera que éste fuera.

Consecuente con estas intenciones, el ministro ordenó públicamente a la Fuerza Armada, en sus dos mensajes previos a las elecciones, cumplir las leyes y disposiciones del alto mando, el cual, dijo, no tolerará desviaciones irresponsables de sus miembros que pongan en duda "el buen nombre y prestigio" del ejército, "especialmente en estos momentos en que la subsistencia de nuestra Institución depende, en gran medida, del continuado respaldo al proceso democrático." En efecto, la subsistencia de la institución

militar depende grandemente de la ayuda económica de la administración Reagan, la cual se encuentra en graves aprietos en el Congreso norteamericano. La consigna de los funcionarios norteamericanos parece haber sido clara y tajante, apoyar el "proceso democrático" en su versión electoral para que el Congreso apruebe los fondos necesarios para continuar la guerra contra el FMLN. Sin esta ayuda el colapso militar parece inminente y con él corre peligro de desaparecer la institución armada tal como la conocemos. Más adelante, para que no quedaran dudas sobre sus intenciones y órdenes, el ministro indicó que con la buena conducta se estaban ganando el derecho a pedir ayuda.

En su mensaje anterior a la segunda ronda ratificó estas disposiciones, subrayando la apoliticidad y el respeto al resultado final. Lo primero supuestamente eliminaría cualquier duda sobre el apoyo de la Fuerza Armada a ARENA y lo segundo garantizaría el posible triunfo del PDC y de Duarte. Un triunfo negado ostensiblemente por la Fuerza Armada en ocasiones anteriores. Según el ministro, se encontraba en juego la dignidad de la Fuerza Armada frente a los políticos. Siendo apolíticos ahora, "nadie en el futuro, desde una posición política, (tendrá) nada que reclamarnos o agradecernos, y especialmente, para que no le debamos agradecimientos o reclamos indignos a nadie."

Los voceros militares aprovecharon estas ocasiones para confesar en público su fe en el pueblo. El ministro de defensa recordó que la Fuerza Armada estaba "en mora con la democracia" y por eso ésta tenía ahora el compromiso de institucionalizar al país, siendo leal al pueblo, sin defraudar su fe en el sistema democrático. Pues, según sus propias palabras, la Fuerza Armada es depositaria de la plena confianza del pueblo. Asimismo, el director de la Policía Nacional afirmó que el pueblo tiene una enorme capacidad de decisión política para distinguir entre lo bueno y lo malo, por tanto, hay que confiar en su selección.

Esta posición oficial de la Fuerza Armada fue dada a conocer por primera vez de forma pública el 3 de enero, cuando daba comienzo la campaña política. Ese día el ministro de defensa ordenó a todos sus subalternos guardar la más completa apoliticidad, es decir, no favorecer a ninguno de los partidos políticos durante la campaña electoral que se avecinaba y, él por su parte, aseguró el respeto del ejército a los resultados de

la voluntad popular. A los partidos políticos les pidió no involucrar a la Fuerza Armada en sus causas partidistas. En consecuencia, desde entonces se dieron instrucciones públicas a los miembros de la institución armada de mantener la unidad institucional a través de la más estricta apoliticidad. Para garantizar el orden y la seguridad de la campaña, el ministro también ordenó a sus jefes y oficiales elaborar los planes correspondientes y atender a las peticiones oficiales de los partidos políticos en forma equitativa y neutral.

Aparentemente, durante la campaña, la Fuerza Armada se atuvo oficialmente a estos principios de comportamiento. Cuando el PDC denunció que algunos mandos locales no estaban cumpliendo con estas disposiciones, el alto mando diligentemente prometió las consabidas investigaciones. Las encuestas entre el electorado potencial sólo podían hacerse con autorización escrita del estado mayor de la Fuerza Armada. Autorización que otorgaban con facilidad a quien la solicitaba si se llenaban los requisitos de control militar. La portación del permiso militar facilitó la labor de nuestros encuestadores a quienes los miembros locales de la Fuerza Armada dejaron hacer su tarea libremente. En una localidad, un miembro de la defensa civil dejó de molestar al encuestador y se le cuadró militarmente al ver el permiso y le exigió órdenes para ayudarle.

Para implementar la seguridad prometida, la Fuerza Armada fue puesta en estado de alerta en todo el país hasta que el Consejo Central de Elecciones diera los resultados oficiales de las dos vueltas. Esto supuso la cancelación de las licencias de los 41 mil miembros de la institución, según las fuentes oficiales. Al aproximarse las fechas electorales, según las mismas fuentes, se aumentó de modo considerable la vigilancia en las principales carreteras del país con el propósito de contrarrestar la amenaza del FMLN de minarlas para impedir la circulación y las elecciones. Se dieron garantías de que la tropa había ocupado los puntos estratégicos para impedir cualquier acción de las fuerzas del FMLN. En orden a garantizar aún más la apoliticidad de los militares, el alto mando giró órdenes para que no votaran, aunque por limitaciones técnicas sus cédulas no se pudieron eliminar del registro electoral. Sin embargo, la derecha presionó para que se permitiera votar a los miembros del ejército. Indudablemente, calculaban que buena parte de esos votos favorecerían a ARENA.



El resultado de estas disposiciones de la Fuerza Armada y de su alto mando se tradujo en un notable orden en la primera votación, a pesar del desorden reinante en el mecanismo mismo de votación, el cual no dependía de los militantes. En el cumplimiento de esta tarea sufrieron pacientemente incluso el empuje físico de las masas ansiosas de entrar a las mesas de votación. En varios lugares los miembros del ejército fueron arrollados literalmente por los votantes en la primera vuelta. Tanto en la primera como en la segunda votación mantuvieron el orden en las largas filas de votantes. Por primera vez en mucho tiempo no dispararon ni atacaron al pueblo desbordado y nervioso por la falta de organización del Consejo Central de Elecciones. Durante todo el proceso proporcionaron una vigilancia respetuosa de las mesas y de los votantes. Asimismo dieron protección y transporte al material de la votación y al personal del Consejo Central de Elecciones. Esto supuso un dispositivo especial

de seguridad el cual tuvo sus costos. Transportando el material electoral para el departamento de San Miguel, uno de los dos aviones de transporte C 123K fue seriamente averiado al aterrizar en una pista minada por el FMLN en las afueras de San Miguel. El piloto y su copiloto quedaron lesionados. Después de la primera ronda oficiales militares entregaron públicamente al Consejo Central de Elecciones 3.368 papeletas de votación abandonadas y anuladas en San Ildefonso (San Vicente). En algunos lugares de San Salvador, concretamente en el estadio Flor Blanca impidieron que se votara sin registro, como habían pretendido algunos partidos políticos interesados. En la votación del 6 de mayo la Fuerza Armada también dio protección como lo habían hecho antes para garantizar el orden. En San Salvador, incluso muchos de sus miembros fueron asignados para ordenar el tráfico de vehículos en las zonas cercanas a los centros de votación y otros estuvieron disponibles para ayudar a la ciudadanía desorientada a encontrar su mesa de votación.

Entre el 17 y el 20 de marzo, los cuerpos de seguridad dieron a conocer un supuesto complot con intenciones de hacerse propaganda destacando su profesionalismo e importancia en la coyuntura electoral. Anunciaron que buscaban un comando suicida supuestamente llegado de Cuba con intenciones de asesinar a funcionarios públicos y políticos destacados. Más tarde añadieron que se trataba de un grupo de francotiradores extranjeros camuflados de periodistas y corresponsales extranjeros no identificados que ingresaron al país con credenciales falsas. Días antes de la primera vuelta, declaraciones atribuidas a Duarte afirmaban que Cuba lo había mandado a matar y que por eso se encontraba escondido preventivamente. Rumores similares se hicieron correr por parte de los cuerpos de seguridad y la prensa nacional que los secunda en ocasión de la visita del Papa el año pasado. La alusión a Cuba forma parte de la campaña orquestada desde la Casa Blanca para responsabilizarla de la guerra y justificar su intervención. La segunda versión muestra la aversión que tienen algunas instancias de la Fuerza Armada a los periodistas y corresponsales extranjeros, a quienes, en concreto el COPREFA, acusa de desinformación por utilizar fuentes de información independientes y no atenerse a sus boletines oficiales. Estos rumores que supuestamente fueron fabricados y echados a correr para hacer propaganda de los cuerpos de seguridad, en realidad, evidencian la poca efica-

Del decir y proceder de la Fuerza Armada no se deduce que su apoyo a ARENA haya sido claro y firme. Pero esto no significa que simplemente el ejército esté entusiasmado con Duarte en la presidencia. Para los militares, Duarte es el menor de dos males.

cia de sus servicios de inteligencia en detectar e identificar a los sospechosos de los cuales no pudieron aclarar ni su número ni su procedencia exacta ni sus intenciones concretas. Todo esto más bien parece mera fábula para crear expectativa.

A otros niveles, la Fuerza Armada se preocupó por presentar una nueva imagen de apoliticidad y democracia ante la comunidad internacional. En todo momento, sus altos oficiales se acercaron a los periodistas internacionales. El jefe del estado mayor visitó el centro de la prensa internacional en el Hotel Sheraton donde fue abordado por los periodistas después de la primera votación. Otros jefes militares de alto rango también se acercaron a la prensa extranjera. Los coroneles más mencionados en los informes y artículos en los periódicos extranjeros son Domingo Monterrosa, José Cruz y Bustillo. De los tres, el primero es el más accesible a la prensa a la cual concede largas horas de entrevistas y les permite acompañar a sus tropas a pie o en helicóptero. El ministro de defensa, en su mensaje del 23 de marzo, expresamente ordenó a sus subalternos colaborar y proporcionar todo tipo de facilidades a la prensa que sería testigo privilegiado del desarrollo y la pureza de la votación.

Una apoliticidad cuestionada

Pese a todo, la apoliticidad de la Fuerza Armada se vio seriamente cuestionada en algunos aspectos importantes. Entre las dos rondas una agencia de prensa internacional filtró la existencia de un documento de la oficialidad de la Fuerza Armada dirigido al futuro presidente. El documento en cuestión condicionaba el apoyo de los militares al presidente: se le limitaban los poderes presidenciales de decisión en cuestiones tan vitales como las pláticas negociadoras con el FMLN, se le advertía sobre cuál debía ser el régimen económico, se reservaba para sí la conducción de la guerra y, en general, trataba de asegurar al ejército la cuota de poder tradicional. En suma, las cosas seguirían como antes con una fachada política de corte democrático.

De inmediato y de forma poco usual en

otros casos similares de rumores, el alto mando salió negando la existencia de tal documento en un campo pagado de media página en los periódicos. En él decía que respetaba lo establecido en la Constitución en cuanto a sus relaciones con el presidente, que éste representaría los intereses y deseos del pueblo al cual se debía la Fuerza Armada y que reiteraba su compromiso de mantenerse al margen del partidismo político y de respetar la soberanía popular. En una palabra, el alto mando "jamás ha expuesto ni expondrá su posición a los candidatos en contienda." Sin embargo, poco después, en su mensaje del día del soldado (el 7 de mayo) el ministro de defensa expuso qué esperaba la Fuerza Armada del nuevo presidente y de su gobierno.

En este mensaje, el ministro explicó las razones de la Fuerza Armada para respaldar al futuro gobierno. Para entonces ya era claro que el ganador de la segunda ronda había sido el PDC. Según sus palabras, la Fuerza Armada está convencida que el gobierno demócrata cristiano "buscará con benevolencia y sin resentimientos la armonía entre todos los salvadoreños," es decir, porque "consolidará sin prejuicios" las fuerzas políticas, económicas y sociales. Por esto podría entenderse continuar con las reformas tal como están legisladas, pero sin ir más allá proponiendo cambios radicales. Concretando aún más, el ministro dijo que esperan del nuevo presidente electo y de su gobierno un trabajo "constructivo y creador," respeto a los derechos individuales y colectivos con el apoyo de la Fuerza Armada, una conducta moral ejemplar, demostrar capacidad para resolver las dificultades actuales y no desviarse. Para la Fuerza Armada los próximos 5 años son un plazo definitivo para "la redención de nuestra Patria" y añadió, "estamos seguros de que ese gobierno respetará nuestro respaldo y unidad con el pueblo y nuestro sacrificio plenamente demostrado."

A la extrema derecha derrotada (ARENA) también le dirigió un mensaje especial para que "declinara antagonismos y resentimientos" y para que no se cruzara "en el camino de la historia estorbando el mejor destino de la Patria, anteponiendo el yo a la colectividad, ni el interés de la facción a la dicha del conglomerado."

La apoliticidad también fue puesta en duda por ciertos hechos, al parecer más bien aislados, pero que evidencian las viejas malas costumbres del pasado. Durante el desarrollo de la campaña electoral, el PDC acusó a los comandantes de Morazán, La Paz y Santa Ana de interferencia. El coronel José A. Cruz fue visto en las mesas de votación armado durante la primera ronda, lo cual estaba prohibido por la ley. En algunas mesas de votación alejadas de los centros urbanos hubo abusos de autoridad y presiones para que los campesinos y gentes sencillas del pueblo votaran por ARENA. A algunos periodistas, testigos de esto, no se les permitió tomar fotografías. Claro está, en comparación con las elecciones pasadas, todo esto no significa nada.

En la segunda ronda hay indicios de que estas presiones a favor de ARENA se dieron de modo más abierto y extendido, sobre todo en los municipios más alejados, testigos de esto los hubo en Jiquilisco. Pero también hay informes de que presiones semejantes ocurrieron incluso en poblaciones como Zacatecoluca. En estos municipios los testigos vieron a los elementos de la Guardia Nacional presionando para conseguir votos para ARENA. Duarte denunció, sin proporcionar pruebas aún, de que un 10 por ciento de los votos a favor de ARENA el 6 de mayo no eran limpios. Ello, dijo, fue posible gracias a la colaboración de los miembros de la Fuerza Armada. D'Aubuisson respondió a estos señalamientos diciendo que era "además de ingrato, injusto" involucrar a la Fuerza Armada en tales actividades, cuando habían estado defendiendo a la patria heroicamente del enemigo común.

Estos incidentes demuestran que algunos comandantes locales y sus mandos intermedios estarían claramente a favor de ARENA. Algunos oficiales, como el coronel Cruz ha negado públicamente haber apoyado a D'Aubuisson, aunque reconoció que eran buenos amigos. Por otro lado, corrieron rumores de que el coronel Monterrosa había favorecido directamente al PDC en la primera votación. Del decir y proceder de la Fuerza Armada no se deduce, contrario a lo que podría esperarse, que su apoyo a ARENA y su candidato haya sido claro y firme. Esta postura de no apoyo a ARENA no significa tampoco que simplemente el ejército esté entusiasmado con Duarte en la presidencia. Para los militares, Duarte es el menor de dos males. Un mal menor que están dispuestos a tolerar 5 años si se deslindan y se respetan las competencias y jurisdic-

ciones mutuas, las cuales estarían formuladas en el documento elaborado por los oficiales, cuya existencia han negado vehementemente luego sus voceros. Por su parte, el ministro de defensa en su mensaje del 7 de mayo ha dicho veladamente lo que esperan del PDC y de Duarte durante estos 5 próximos años.

La tolerancia actual hacia el PDC y Duarte es el resultado de los denodados esfuerzos de éste último para acercarse a la Fuerza Armada en un intento de mejorar sus relaciones y de los de la embajada de Estados Unidos y sus asesores quienes han advertido a los militares que con D'Aubuisson en la presidencia la ayuda económica y militar tan necesaria sería prácticamente imposible. Parece que Duarte se hizo de amigos entre los oficiales al no hacerlos responsables de la crisis actual durante su campaña. Más bien se ha mostrado sumamente respetuoso de los militares. La campaña de la administración Reagan, por otro lado, en contra de la violencia de la extrema derecha ha hecho conciencia en muchos oficiales sobre lo que pasaría con la ayuda norteamericana si D'Aubuisson resultara electo. Aparte de que varios oficiales han declarado anónimamente a la prensa internacional que D'Aubuisson carece de las cualidades y capacidades suficientes para ser presidente, durante estas últimas semanas la administración Reagan ha estado llevando a Washington a los comandantes de la Fuerza Armada y a algunos oficiales relevantes de dos en dos. Según los informes de prensa, el propósito de la visita es aclararles la postura oficial respecto a su papel en la conducción de la guerra y el desarrollo de la vida política. El ejército ha captado bien el mensaje y está muy consciente de los costos políticos y de su significado económico y militar.

Duarte, por su parte, es muy consciente de que debe tener cuidado con la Fuerza Armada con la cual, a pesar de todas sus confesiones públicas de constitucionalismo, es más probable que tenga dificultades; sobre todo, si en verdad quiere ejercer su responsabilidad constitucional de comandante en jefe.

Seis militares de alto rango, quienes ofrecieron declaraciones a la prensa internacional a condición de no ser identificados, confirmaron lo anterior. Los altos oficiales están dispuestos a aceptar a Duarte, pero advirtiendo en seguida que éste debe actuar con cuidado para ganarse su confianza y sobre todo no debe hacer cambios drásticos. Estos oficiales dan por hecho que algu-



nos de sus colegas, entre ellos el teniente coronel José A. Cruz (comandante de Morazán), el coronel Nicolás Carranza (director de la Policía de Hacienda), el teniente coronel Mario Denis Morán (comandante de Zacatecoluca) y el teniente coronel Roberto Mauricio Staben (comandante del batallón Arce), serán jubilados o enviados a cargos en el servicio exterior, entre otras cosas por haber expresado su apoyo a D'Aubuisson. Los oficiales creen que Duarte no hará cambios drásticos en la Fuerza Armada y, en concreto, dentro de las fuerzas de seguridad, "sabe que si trata de deshacerse de (ellas) lo derrocaremos." Estas afirmaciones son respuesta a los propósitos expresados por Duarte de terminar con los escuadrones de la muerte repetidamente acusados de estar estrechamente vinculados con los cuerpos de seguridad. El oficial añadió, "Duarte puede estar loco, pero no es estúpido."

El *New York Times* del 29 de abril asegura que una comisión especial de oficiales militares pidió al ministro de defensa informar al ganador de las elecciones del 6 de mayo que no podrá cambiar la estructura orgánica de la Fuerza Armada. Todo parece indicar que ésta y otras advertencias similares dirigidas a Duarte se originaron en supuestas declaraciones suyas en las cuales habría dicho que suprimiría a todos los cuerpos de seguridad. La comisión especial, establecida hace más de un año para hacer recomendaciones militares en el interior del ejército, aclaró que el presidente podrá hacer cambios

personales, pero los cambios estructurales deberán ser discutidos por el alto mando; de lo contrario habría "repercusiones." El ministro de defensa admitió, por su parte, que quienquiera que cometiera el error de tratar de cambiar la institución militar a toda velocidad no obtendrá nada. Asimismo dijo confiar en que Duarte no tratará de disolver ninguno de los tres cuerpos de seguridad, a los cuales los asesores y los funcionarios norteamericanos consideran principales responsables por las violaciones masivas a los derechos humanos.

Un alto oficial también hizo llegar un mensaje de la Fuerza Armada a D'Aubuisson en una conversación privada. Antes del 6 de mayo, la Fuerza Armada hizo saber a D'Aubuisson que creían que el ganador sería Duarte y, por lo tanto, él tendría que hacer sacrificios por la patria. La conversación pretendía hacer entender a D'Aubuisson que debía pasar a la oposición constructivamente en el nuevo gobierno. Este mensaje para la derecha está recogido también en el discurso del ministro de defensa del 7 de mayo. Según las fuentes militares del *New York Times*, el mensaje no fue bien recibido por D'Aubuisson por lo que hay preocupación creciente entre algunos oficiales ante la posible reacción de la extrema derecha después del 6 de mayo.

Al finalizar las jornadas electorales el alto mando por medio del ministro de defensa felicitó y agradeció a todos los miembros de la Fuerza Armada por su atención profesional y ejemplar.

En su mensaje de felicitación del día del soldado (7 de mayo), el ministro dijo que todos estaban orgullosos por la satisfacción del deber cumplido, con su comportamiento profesional "conquistaron la batalla más honrosa en la existencia de la institución." Resumiendo la labor de la Fuerza Armada en estos días, el ministro dijo que sus miembros habían contenido al enemigo (el FMLN) y se habían convertido en baluartes de la democracia "transformando las calles, caminos y veredas del país, en anchas vías de libertad para que nuestro pueblo pudiese llegar independiente y soberano, a fortalecer con su voto en las urnas el proceso de democratización." El jefe del estado mayor, coronel Adolfo Blandón, también hizo público su orgullo institucional al haber demostrado al mundo que la Fuerza Armada apoya a su pueblo y le garantiza el derecho al sufragio el día de elecciones.

Lamentablemente la libertad, la independencia y la soberanía sólo han sido efectivas el 25 de marzo y el 6 de mayo, porque resulta muy difícil concluir con el ministro que del actual comportamiento de la institución militar en esos dos días el pueblo haya reconocido en cada soldado y en cada agente a la Fuerza Armada que siempre anheló. Difícil estar de acuerdo con esta conclusión porque los usuarios del transporte público siguen siendo maltratados por los retenes, cientos continúan desapareciendo y más pierden la vida en manos de los escuadrones de la muerte y en los operativos militares en las áreas rurales, donde se ha estado utilizando el bombardeo intenso e indiscriminado.

Eso para no hablar de los graves cargos de corrupción que se siguen lanzando en contra de la Fuerza Armada. Las acusaciones más recientes proceden del militar de baja Roberto Santibáñez, quien en una entrevista para la cadena norteamericana de televisión CBS, acusó de crímenes políticos, a sus antiguos colegas el 29 de febrero. Santibáñez declaró para estupor de la Fuerza Armada que el coronel Nicolás Carranza, el general Guillermo García y D'Aubuisson son los directores de los escuadrones de la muerte, los cuales actúan con completa impunidad gracias a la protección de los cuerpos de seguridad. Además, añadió que Carranza ha estado recibiendo en los últimos 6 años 90 mil dólares anuales de parte de la CIA y que D'Aubuisson, a pesar de estar de baja, ha continuado recibiendo salario militar. Afirmó que el actual ministro de defensa está ocultando

personalmente al asesino de las 4 religiosas norteamericanas por ser un pariente próximo.

En el Congreso norteamericano se han seguido ventilando informes de malversación y fraude en el uso de la ayuda norteamericana. En concreto, se ha dicho que algunos militares han vendido armas norteamericanas al FMLN. Incluso se ha afirmado que las pocas patrulleras del golfo están más interesadas en robar camarón que en vigilar el tan traído y llevado tráfico de armas procedente de Nicaragua.

Dudosa capacidad militar

Que la fuerza armada haya contenido a las fuerzas del FMLN durante las elecciones es demasiado afirmar por parte del ministro de defensa. Los hechos indican una realidad muy diferente. Tanto aquí como en Estados Unidos se ha dicho a quien haya querido oírlo que los operativos militares en marcha tenían como propósito permitir las elecciones que supuestamente el FMLN estaba muy interesado en impedir en todo el país. Como las elecciones se tuvieron con una afluencia masiva de votantes, es claro, entonces, que ello se debe a la labor militar de la Fuerza Armada, la cual contuvo al FMLN.

Con este objetivo la Fuerza Armada, sin embargo, desarrolló operaciones de contrainsurgencia en cuatro frentes simultáneamente: Usulután, especialmente en las áreas de Jucuarán, San Agustín y la zona costera; en el norte del departamento de San Vicente, desde los cerros de San Pedro, Santa Clara, hasta la frontera con el departamento de Cabañas; en la zona norte de los departamentos de San Miguel y La Unión y en Chalatenango. Unidades de infantería han dirigido intensos bombardeos con artillería pesada al oriente de San Vicente. En Chalatenango han llevado a cabo acciones de rastreo. En Morazán con la participación de los batallones Atonal, Arce, tercera brigada de infantería y el apoyo de la aviación han lanzado fuertes ataques cerca de la frontera con Honduras. También se puso vigilancia especial en las represas más importantes, constantemente amenazadas por el FMLN. Según el coronel Julio López Y., comandante de Usulután, "la clave es estar listos para reaccionar."

A pesar de todos estos preparativos militares, la Fuerza Armada no está en capacidad de garantizar la integridad del territorio nacional en su totalidad. El coronel Monterrosa reconoció



ante la prensa internacional que de las elecciones de marzo de 1982 hasta la fecha, el departamento de San Miguel había sido infiltrado más aún por el FMLN. Estimó que el 20 por ciento de sus habitantes vivían sin la protección del gobierno. O sea que fue imposible votar en los municipios del norte del departamento. El coronel José A. Cruz, comandante de Morazán, reconoció que el FMLN tenía control de todos los pueblos situados al norte del río Torola y explicó que no haría ningún esfuerzo militar para que sus habitantes votaran. Quienes quisieran hacerlo tendrían que cruzar el río y presentarse como refugiados o desplazados. El triunfalista vocero del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), coronel Ricardo Cienfuegos, reconoció que el FMLN podía atacar prácticamente cualquier punto del territorio nacional y lo podía conservar todo el tiempo que quisiera hasta que la Fuerza Armada decidiera desalojarlo. Por eso, quizás, a un coronel que permaneció en el anonimato ya le parece que "el país es tan grande que no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo."

Ni el gobierno ni la Fuerza Armada hicieron esfuerzo alguno para organizar la votación en por lo menos 22 municipios, los cuales estaban dentro de un círculo rojo en el mapa oficial del

Consejo Central de Elecciones. Los militares explicaron al consejo que era muy arriesgado proporcionarles seguridad ahí. Sin embargo, el ejército aseguró al consejo que acompañaría a sus empleados en más de una docena de municipios a lo largo de los volcanes orientales donde el control del gobierno, en el mejor de los casos, se reduce a cortos períodos. El coronel Monterrosa, antes del 25 de marzo, recorrió algunos municipios de su jurisdicción, en los cuales destacó parte de sus tropas para prevenir los ataques del FMLN y poder llevar a cabo las elecciones. El abandono de la Fuerza Armada de estas poblaciones es un reconocimiento oficial del control rebelde.

Los esfuerzos para contener al FMLN resultaron vanos, al menos parcialmente. Antes de las dos rondas sus fuerzas atacaron fuertemente la ciudad de San Miguel, la primera vez el 17 de marzo y la segunda el mismo 6 de mayo en la madrugada. Mientras el coronel Monterrosa dirigía un operativo de 2.500-3.000 hombres cerca de la frontera para poner a la defensiva al FMLN antes de las elecciones del 25 de marzo, las fuerzas de ésta última entraron en la ciudad de San Miguel, donde el coronel tiene su cuartel general, y atacaron durante 3 horas con morteros de 81 mm. la tercera brigada de infantería y minaron las vías de acceso principal. En el norte del departamento, el coronel fue emboscado en las proximidades de San Luis La Reina. Hubo retenes del FMLN en 3 puntos de la carretera Panamericana, el más próximo a 16 kilómetros de San Miguel. También dispararon morteros sobre San Sebastián. De todos modos, el coronel dijo estar satisfecho de hacer contactos con las fuerzas del FMLN después de 11 días de operativo. Pudo recuperar San Luis La Reina porque el FMLN lo abandonó antes de que él llegara.

El 6 de mayo en la madrugada el FMLN regresó a San Miguel. Según los informes oficiales, el FMLN penetró en la ciudad la noche del sábado 5 de mayo, pernoctando en el sector sur-este. El ataque dio comienzo en la madrugada del 6, amparado por un apagón general que afectó los departamentos orientales (San Miguel, La Unión y Morazán). El FMLN atacó con morteros los cuarteles de la Policía Nacional y de la Policía de Hacienda e hizo estallar bombas en varios puntos claves, entre ellos las oficinas de ANTEL. Causó daños considerables en la subestación de energía de CAESS y en la alcaldía. El ataque duró una hora y media, habiendo penetrado

las fuerzas del FMLN hasta el mismo centro de la ciudad. Al retirarse, dejaron bombas en diferentes lugares. Dos agentes policiales murieron tratando de desactivar una de ellas. La Fuerza Armada les rindió un homenaje inusual en los periódicos matutinos.

El 25 de marzo hubo encuentros armados menores que, si bien no causaron mayores efectos sobre el desarrollo de la votación, sí corroboraron las apreciaciones del coronel Cienfuegos. En efecto, la Fuerza Armada informó de encuentros menores en Santa Ana, La Palma y San Ignacio (Chalatenango). La víspera el FMLN emboscó una unidad militar en las cercanías de la ciudad de San Vicente, causándole 27 muertos en un enfrentamiento que duró toda la tarde. "El enemigo tenía una posición favorable en un área donde estábamos vigilando. Sorprendieron a nuestros hombres," explicó un capitán. El coronel Monterrosa dijo a los periodistas que San Miguel estaba bien guardada desde muy temprano en la mañana del 25, pero a menos de 10 kilómetros de la ciudad el FMLN puso un retén que impidió el tráfico de vehículos, excepto los de los periodistas. Además, desde el 24/ en la noche el sabotaje a la energía eléctrica dejó a oscuras la capital y muchos otros departamentos. La normalidad del servicio eléctrico y de agua potable se restableció hasta el 27 de marzo.

Acciones similares se repitieron el 6 de mayo. La región este del país quedó sin energía por el derribo de tres torres. El apagón también afectó a la zona metropolitana. Hubo enfrentamientos en El Paisnal, a 32 kilómetros al norte de San Salvador, donde quedaron destruidas las instalaciones de la defensa civil y muy dañado el nuevo edificio y mobiliario de la alcaldía; emboscada en el ingenio Jiboa a 6 kilómetros de San Vicente; hostigamientos en San Sebastián y San Ildefonso en el mismo departamento y enfrentamientos en las márgenes del río Aguas Calientes (Tecoluca) y Las Marías (Chinameca). También derribaron torres de energía en Zacatecoluca y Chalatenango.

Hasta el embajador Pickering y los observadores norteamericanos se llevaron un buen susto, cuando al aproximarse a la ciudad de San Miguel sus helicópteros fueron blanco de disparos hechos desde tierra. A uno de los helicópteros le dieron 3 disparos en las aspas y otro en el fuselaje. No pudiendo aterrizar en San Miguel, siguieron hacia La Unión.

Con todo, el balance general del jefe del es-

tado mayor fue positivo. Reconoció la existencia de hechos violentos, especialmente en la zona central y oriental y que el ejército había cometido algunas fallas. Pero comentó, con sabio estoicismo militar, "este es el precio que tenemos que pagar por defender el proceso democrático, pero lo hacemos con gran satisfacción."

El coronel Monterrosa también expresó su satisfacción por el control militar de oriente, pues habían logrado detener al FMLN en Sociedad, Cacaopera, Jocoro, Delicias de Concepción, Lolotiquillo, Jucuapa, Chinameca, San Buenaventura y otros lugares; pero añadió que estaba triste y desilusionado "cuando sabemos de los problemas a que ese pueblo fue sometido por falta de una buena organización" de parte del Consejo Central de Elecciones al olvidarse de lo principal el 25 de marzo, el votante. El sacrificio de la Fuerza Armada, continuó el coronel, no había dado resultado. Sus juicios contra los organizadores de la primera ronda electoral fueron duros, "el pueblo no es pelota de trapo," dijo en un titular destacado por *El Mundo* en gran titular de primera página. Y añadió que "le dolía la frustración del pueblo que fue sometido a tanto sacrificio y dificultades... Creo que el pueblo merece respeto y si es el soberano, debe recibirlo realmente."



EE.UU. se prepara para el colapso militar

La embajada norteamericana en San Salvador, sin embargo, no está muy satisfecha con la marcha de la guerra ni de las acciones de la fuerza armada. Según el *Miami Herald* del 18 de marzo, la embajada ha estado enviando informes a Washington diciendo que no están ganando la guerra, es decir, que la están perdiendo. Todo parece indicar que la administración Reagan se está preparando para el posible colapso del ejército salvadoreño poniendo a sus propios soldados y su propia infraestructura en la zona. Para no herir las susceptibilidades en un año electoral, los funcionarios norteamericanos están diciendo que los 1.700 soldados destacados en Honduras están simplemente para apoyar las maniobras de entrenamiento y quizás permanezcan ahí hasta por 20 años, según aclaró el general Paul Gorman del comando sur. Esta ficción conveniente evita pedir dinero al Congreso para construir barracas, puertos, hospitales militares, facilidades de comunicación y estaciones de radar.

La Casa Blanca y la administración Reagan han aprovechado muy bien la coyuntura electoral para avanzar más estos planes. Ciertamente, no hicieron ningún favor a la Fuerza Armada salvadoreña cuando sus altos funcionarios testificaron ante el Congreso y declararon a la prensa que ya no quedaban ni armas ni municiones en El Salvador. El jefe del comando sur, el general Paul Gorman, entre otros, declaró alarmado que el ejército salvadoreño empezaría a experimentar urgentes problemas de abastecimiento militar en marzo, a menos que se le proporcionara ayuda económica adicional por valor de 178 millones de dólares. El mismo Reagan puso en juego su prestigio presidencial diciendo que "sin esta ayuda militar y de entrenamiento El Salvador no puede tener elecciones seguras ni defenderse." Sin embargo, otros funcionarios en Washington expresaron su extrañeza ante estas afirmaciones tan pesimistas porque, en su opinión, había material suficiente hasta mayo por lo menos y eso contando con un incremento normal de las acciones militares. Asumiendo que la petición sería aprobada por el Congreso, la administración Reagan ordenó gastar 32 millones de dólares en armas y equipo para la Fuerza Armada salvadoreña. El paquete comprendía lo siguiente: 4 helicópteros UH1H Huey valorados en 5 millones de dólares para evacuar a los heridos y disminuir el porcentaje de muertos por falta de atención médica ade-

cuada que ha sido excepcionalmente alto (2.292 muertos en el año que concluye el 30 de junio próximo), lo cual afecta mucho la moral del ejército; 12 cañones de 105 mm para dotar a cada batallón con una escuadra de artillería, lanzadores de granadas M 79, rifles sin retroceso de 90 mm, 4 lanchas pequeñas para patrullaje naval, radios de batalla, munición, repuestos y entrenamiento.

La administración Reagan ha hecho un dramático aumento en el papel militar de Estados Unidos en El Salvador. Ese aumento dramático se manifiesta a varios niveles. Un oficial militar norteamericano dijo que los asesores destacados en el país han estado acompañando a los pilotos salvadoreños en misiones de entrenamiento en las cuales, ocasionalmente se han visto comprometidos en combates o han sido blancos potenciales o han bombardeado posiciones del FMLN. Si bien, por un lado, los funcionarios de la embajada han negado enfáticamente estas aseveraciones, el oficial militar que hizo la revelación explicó que todo depende de lo que se entienda por misión de combate y de entrenamiento. Para un piloto salvadoreño toda misión es de combate, pero para Estados Unidos algunas de las misiones son únicamente de entrenamiento. Justificando las actividades beligerantes de los asesores, el oficial explicó que a ellos les gusta hacer bien su trabajo y la mejor forma de hacerlo es comprometiéndose bastante con la situación actual.

Otra manifestación de este incremento son los vuelos de reconocimiento y espionaje de Estados Unidos sobre el territorio nacional. Estos vuelos son el primer apoyo regular táctico de Estados Unidos a la guerra. Los vuelos comenzaron semanas antes de las elecciones desde Panamá, pero ahora han cambiado de base. Los aviones *OVI Mohawk* de turbo propulsión desarmados que cuentan con un sofisticado sistema de rayos infrarrojos para el espionaje están operando desde la base de Palmerola (Honduras) con el permiso de ambos gobiernos. Cuando se comenzó esta operación los asesores presidenciales propusieron a Reagan lanzar también misiones de combate, pero éste las rechazó de momento. Los aviones de reconocimiento proporcionan buena información sobre las supuestas posiciones del FMLN. La información tarda 2 horas en llegar del avión espía a la fuerza aérea de San Salvador. El avión radia su información desde el aire a Panamá y desde allí se pasa al Pentágono, donde es analizada y desde donde a su vez se envían las



instrucciones vía télex a Ilopango, cuartel general de la fuerza aérea.

Esta colaboración norteamericana ha intensificado significativamente el bombardeo sobre territorio enemigo desde principios de marzo. Los aviones A-37 *Dragon fly*, tipo jet, proporcionados por Estados Unidos, han estado dejando caer un promedio de 30 bombas al día, cuando en febrero sólo dejaban caer 10. Estas operaciones de bombardeo han sido particularmente intensas en el departamento de Cuscatlán, al noroeste de Tenancingo, un área disputada por mucho tiempo entre el FMLN y la Fuerza Armada; y el área ubicada entre el volcán de Guazapa y Suchitoto; en el departamento de San Miguel, al este y norte de Ciudad Barrios y también en los departamentos de Chalatenango, Morazán y Usulután. En todas estas zonas los bombardeos han sido diarios desde marzo. Las fuentes militares aseguran que la intensidad de los bombardeos seguirá durante todo el período "electoral" tanto cuanto se pueda y lo permitan los recursos disponibles. Los voceros militares justifican este incremento diciendo que es para prevenir que el FMLN llegue a impedir las elecciones. Es un esfuerzo "supremo" para mantener alejados a "los subversivos."

El bombardeo intenso ha ocasionado víctimas civiles, las cuales se han incrementado también. Según la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, el número de civiles muertos en los operativos militares se ha elevado de 195 en febrero a 300 en marzo. Los oficiales de la fuerza aérea niegan estos cargos, haciendo notar que

tienen órdenes de no bombardear civiles. Pero un oficial norteamericano, asesor de la fuerza aérea, asegura que él no puede garantizar que las órdenes sean respetadas dado que no puede acompañar a los pilotos salvadoreños en los vuelos de combate.

En cuanto comenzaron a llegar las primeras denuncias de los bombardeos indiscriminados a los civiles, el COPREFA salió a negarlo con el pobre argumento de que todo el ejército estaba siendo víctima de la desinformación, en unos momentos en que la relación entre el pueblo y la Fuerza Armada era de "mutuo respeto y colaboración." El terrorismo, acusó el vocero militar, se apresta a minar esa realidad con una campaña orquestada y centrada en supuestos bombardeos sobre las poblaciones civiles. En realidad, a pesar de las declaraciones oficiales los hechos demuestran claramente que, en efecto, la fuerza aérea ha bombardeado población civil de forma indiscriminada.

Hace unas semanas bombardeó la población de Tenancingo y existen pruebas contundentes de las órdenes del jefe de operativo en tierra para los aviones de atacar a los civiles. Informes recientes indican que la Fuerza Armada ha estado utilizando las actividades humanitarias de la Cruz Roja Internacional para localizar y atacar grupos de desplazados en las áreas de conflicto. Los ataques han ocurrido en los sitios donde la Cruz Roja Internacional hace las entregas de alimentos y medicinas, horas después de haber desaparecido sus vehículos y su personal. En otras ocasiones no se ha permitido a la Cruz Roja Internacional

llegar a los puntos de distribución. Los desplazados que aguardan su llegada reciben en su lugar el fuego de la fuerza aérea desde helicópteros y aviones y a veces de las tropas de infantería también. Por esto la Cruz Roja Internacional suspendió la distribución de alimentos y medicinas en la mayor parte del norte del departamento de Cuscatlán y en el noroeste del de Cabañas.

Un vocero del alto mando salvadoreño, el capitán Luis Mario Aguilar Alfaro, explicó que la población en las zonas de conflicto es considerada como "masas, grupos de civiles desarmados que dan apoyo logístico a las guerrillas y que con frecuencia viven muy próximos a los campamentos guerrilleros," y añadió, "no son inocentes." Un teniente a cargo de la Guardia Nacional de Suchitoto dijo, "por supuesto, se están lanzando bombas en los alrededores de aquí todo el tiempo. Eso es porque todos los pueblos fuera de aquí están llenos de combatientes guerrilleros o masas." El embajador Thomas Pickering comparte este punto de vista, en un reciente cable al Departamento de Estado describió a las masas como algo más que inocentes espectadores. Sin embargo, el embajador norteamericano anduvo muy preocupado con las elevadas cifras de civiles muertos en estos bombardeos que estaba dando la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.

Antes del 25 de marzo, el Pentágono envió a las costas centroamericanas al porta-aviones *USS America* y su equipo de batalla (3 ó 4 barcos más) para hacer ejercicios militares pequeños. Alrededor del 7 de mayo organizó maniobras navales con la participación de hondureños y salvadoreños en el Golfo de Fonseca. Las maniobras, "guardianes del golfo," tenían como propósito mejorar las técnicas de vigilancia e interdicción supuestamente del tráfico de armas originado en las costas nicaragüenses. Por primera vez, los militares norteamericanos excluyeron a los periodistas del golfo. Un militar norteamericano, quien no quiso ser identificado y que participó en estas maniobras, explicó que era equivocado describir estas operaciones como maniobras de entrenamiento, refiriéndose al término usado por el Pentágono, "nosotros y los hondureños nos estamos movilizand. Aquí hay una guerra. Este operativo es de verdad."

Estas y otras explicaciones o aclaraciones de parte de los asesores norteamericanos han sido confirmadas por los altos funcionarios de la administración Reagan, quienes aseguran se están elaborando planes de contingencia para el posible uso de tropas norteamericanas, si la estrate-

gia actual no logra derrotar a las fuerzas izquierdistas en la región. Las tropas norteamericanas serían usadas bajo los términos del tratado de defensa mutua de Río de Janeiro (1947). Este tratado ya fue invocado cuando se impuso el bloqueo a Cuba a principios de los 60, en la República Dominicana en 1965 y más recientemente en Granada. Los funcionarios creen que la necesaria aprobación del Congreso según el acta de los poderes de guerra será fácil porque ninguno de sus miembros querrá abandonar Centroamérica al comunismo. Los planes de contingencia, supuestamente una mera rutina en cuanto los militares del Pentágono deben estar preparados para cualquier posible crisis, buscan tener a las tropas norteamericanas listas para responder a la orden presidencial con prontitud y expedición.

Los ejercicios militares en marcha, los pequeños y los grandes, como Granadero y Aventura Oceánica 84, pretenden proporcionar al comando sur, a los comandantes de tropa y al personal de servicio un grupo de gente que haya sido expuesta al terreno, clima y condiciones bajo las cuales algún día podrían encontrarse peleando. Las maniobras también sirven para poner a prueba los planes de contingencia, pero de hecho han servido más para construir bases aéreas, puertos y otras facilidades que permitan una presencia norteamericana permanente en Honduras. Los funcionarios que hicieron estas revelaciones aseguran también que estos planes son para mediano plazo, piensan en 1985 ó 1986, para dar tiempo a que trabaje el programa actual. Internamente, estos planes de contingencia advierten al Congreso que es mejor apoyar ahora la política del presidente Reagan hacia Centroamérica para reducir la posibilidad de tener que usar las tropas norteamericanas más tarde.

El secretario de defensa Winberger ha negado la existencia de planes para uso de tropas norteamericanas si falla la estrategia actual para derrotar a los izquierdistas tal como lo revelaron al *New York Times* otros funcionarios de la administración. Sin embargo, éstos últimos confirmaron sus aseveraciones previas, aunque enfatizando que el uso de esas tropas no es ni deseable ni inminente. El embajador Negroponte y el director de asuntos latinoamericanos del consejo de seguridad nacional de Estados Unidos declararon que, en último término, están dispuestos y preparados a cualquier eventualidad. Esto demuestra la voluntad política del Pentágono y del presidente Reagan de mantener su hegemonía en la región sin preocuparse de la opinión pública doméstica ni internacional.